



Medellín, dieciséis (16) de febrero dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- EJECUTIVO LABORAL
EJECUTANTE: ANDRÉS MAURICIO CALVO
DEMANDADO: COLPENSIONES
PROCEDENCIA: JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001-31-05-004-2015-01828-01

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**, en el proceso ejecutivo laboral de primera instancia, instaurado por el señor **ANDRÉS MAURICIO CALVO**, en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES**, procede a decidir el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutante, contra al auto del 18 de octubre de 2022, dictado por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual, se negó la solicitud de nulidad de la prueba decretada de oficio.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el magistrado ponente **FRANCISCO ARANGO TORRES**, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

El apoderado judicial del señor ANDRÉS MAURICIO CALVO, presentó demanda ejecutiva laboral contra COLPENSIONES, pretendiendo el cobro coactivo del retroactivo pensional conforme la Resolución GNR 311018 del 09 de octubre de 2015, los intereses moratorios y las costas y agencias en derecho.

Mediante auto del 18 de octubre de 2016, el juzgado de instancia libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

- \$29'594.247 por retroactivo pensional reconocido mediante Resolución GNR 311018 del 09 de octubre de 2015.

- Intereses moratorios legales del artículo 1617 del Código Civil, generados entre el 01 de noviembre de 2015 y hasta el pago total.

La entidad ejecutada COLPENSIONES, presentó las excepciones de PAGO, COMPENSACIÓN Y PRESCRIPCIÓN frente al mandamiento de pago, indicando que la entidad pagó en tiempo la condena, sin embargo, no aportó prueba alguna del referido pago.

El 05 de septiembre de 2017, se inició la audiencia pública con el fin de resolver las excepciones propuestas por COLPENSIONES contra el mandamiento de pago, no obstante, al inicio de la audiencia el apoderado de Colpensiones presentó un certificado donde aparece el ejecutante como beneficiario de una indemnización de sobrevivientes por valor de \$29.594.247, razón por la cual, consideró el *a quo* necesario decretar dicha prueba de oficio por ser sobreviviente, atendiendo a las facultades del art. 54 del CPL y de la SS, dando traslado al apoderado de la parte ejecutante para que se pronunciara sobre la misma.

Seguidamente, el apoderado de la parte ejecutante manifiesta estar inconforme con el decreto de la prueba de oficio, por considerar que no es una prueba sobreviviente, afirmando que a la entidad accionada se le dio un término perentorio para acreditar el pago y proponerlo como excepción de mérito, carga procesal que no realizó.

El juez de instancia indicó en dicho momento que, al tratarse de una prueba oficiosa, la misma tenía sustento en el artículo 54 del CPL y de la SS, decisión que no era objeto del recurso, aunado a que consideraba que la prueba era necesaria para resolver. En cuanto a la posibilidad de presentar recurso, afirmó que solo procedía cuando se negaban las pruebas.

También señaló que la prueba aportada por COLPENSIONES, no daba plena certeza del pago y que por tal razón debía recurrir a la facultad oficiosa para saber cuándo fue realizado el pago, por lo que requirió a COLPENSIONES para que remitiera certificación a fin de indicar en qué momento y a qué cuenta fueron girados dichos dineros, por lo que suspendió la audiencia hasta el momento de contar con la referida prueba, sin que ninguna de las partes manifestaran desacuerdo frente a esta determinación.

Posteriormente, mediante memorial del 11 de septiembre de 2017, la ejecutada informó al Despacho que mediante Resolución GNR 311018 del 09 de octubre de 2015, reconoció un pago único al joven ANDRÉS MAURICIO CALVO por valor de \$29'594.247, valores que fueron girados en la nómina de febrero de 2016, con pago en marzo del mismo año.

De igual forma, mediante memorial del 17 de octubre de 2017, el apoderado de la entidad ejecutada allegó al Despacho CD contentivo del expediente administrativo del ejecutante, que igualmente daba cuenta del pago efectuado.

DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA

El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de instancia continuó con la Audiencia Pública para resolver las excepciones propuestas por la ejecutada, indicando que como COLPENSIONES allegó la prueba del pago el 17 de octubre de 2017, dicha evidencia debía ser parte del proceso ejecutivo, máxime que había sido decretada de oficio, otorgando la palabra al apoderado de la parte ejecutante, quien manifestó nuevamente no estar de acuerdo con la prueba de pago sobreviniente porque consideraba que el único momento procesal oportuno para aportarla es con la contestación de la demanda ejecutiva, ya que así lo dispone el artículo 29 constitucional, que señala que es nula de pleno derecho toda prueba obtenida en contra del debido proceso, es decir que en virtud del principio de preclusión, la parte ejecutada debía aportar los elementos de prueba en el momento oportuno, de manera que si dentro de los 5 días no pagó, incurre en mora y no puede el juzgado decretar prueba sobreviniente, sino que por el contrario, es deber ponerle “tate quieto” a las entidades públicas, ello aunado a que la carga de la prueba le corresponde a las partes y aunque el juez cuente con poderes oficiosos, no puede suplir esas responsabilidades porque pierde la imparcialidad al decretar una prueba de oficio que no fue aportada con la contestación de la demanda, siendo entonces una prueba ilícita.

Para resolver, indicó el juez de instancia que como director del proceso tiene una amplia facultad en materia de pruebas que incluye el juicio ejecutivo, por lo que si bien la ejecutada tiene la carga probatoria de demostrar el pago, no se puede desconocer que en este asunto se demostró el pago efectuado por el deudor, planteamiento que se hizo desde la contestación del proceso ejecutivo, debiendo auscultar dicha situación, pues de lo contrario, permitiría el enriquecimiento ilícito de una de las partes, es decir, que debía obrar conforme a la realidad material y acudir a la actividad oficiosa con el fin de evitar la continuación de la ejecución por un pago que ya se hizo.

De igual forma, afirmó que debe existir lealtad procesal de las partes, de manera que si la parte ejecutante ya recibió el pago, debió manifestarlo de esta forma.

Por lo dicho, concluyó que en este caso se acreditó con la Resolución SUB 18442 del 24 de marzo de 2017, el pago del dinero adeudado al ejecutante, mismo que se hizo en el

Banco Sudameris la primera quincena de febrero de 2016, por lo que declaró probada parcialmente la excepción de pago frente a la solicitud de retroactivo pensional, pero ordenó continuar el proceso ejecutivo por los intereses legales del art. 1617 del Código Civil causados entre el 01 de noviembre de 2015, al 31 de enero de 2016.

ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte ejecutante presenta recurso de apelación, con el fin que se revoque la misma en el sentido de declarar la nulidad de la prueba decretada por el juez de instancia, argumentando que, si el juez habla de lealtad procesal, no debe defender una entidad que deja morir personas esperando su pensión, porque es una entidad que cuenta con todo un equipo jurídico que debe cumplir su rol.

Refiere el abogado recurrente que le encanta el litigio y trae a colación diferentes actuaciones que ha adelantado ante la Corte Constitucional para obtener la pensión de niños huérfanos entre otros, con el fin de demostrar que lo que busca es la materialización de los cánones constitucionales.

En este sentido, reitera que cada parte tiene deberes y en el caso de la ejecutada, era el de presentar en el término oportuno los elementos de prueba, ya que nos encontramos en un proceso ejecutivo y no declarativo, debiendo demostrar el pago pero no lo hizo, entonces considera que no basta con la sola afirmación de pago para suspender la audiencia, con el argumento que se debía incorporar una prueba sobreviniente, porque el proceso se rige por unas formalidades y procedimientos que se deben respetar, máxime que el juez debe salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales, sin desbordar sus funciones, porque las pruebas no se pueden aportar cuando se quiera, ni dejar en indefinición los derechos, por virtud de los principios de preclusión y eventualidad.

Adicionalmente, dice que el Despacho no le da traslado de la prueba, siendo una sorpresa su incorporación, insistiendo en la nulidad de pleno derecho de la misma.

También señala que la entidad ejecutada es una parte poderosa que incluso daña familias, porque en los procesos judiciales se ventilan derechos claros, pero las personas mueren esperando una pensión, todo debido a la inactividad de COLPENSIONES, entonces viene el juez en este proceso a tratar de suavizar al poderoso, cuando lo cierto es que los jueces nacieron para contrarrestar esa misión, con el fin que los afiliados, pensionados y trabajadores, puedan tener un equilibrio del proceso judicial.

Ahora, en cuanto al argumento del enriquecimiento sin justa causa señalado por el juez de instancia, afirma que es un argumento de parte, siendo la ejecutada quien debió proponerla y no un Juez de la República, por lo que al haber hecho uso de los poderes oficiosos, le dio la oportunidad a una entidad de aportar una prueba que no allegó en tiempo y de la cual nunca se le dio traslado porque no hay ningún auto que así lo hiciera, llevando de esta manera a COLPENSIONES de la mano, cuando es la parte fuerte del proceso.

En consecuencia, solicita que se revoque la decisión y se respete el debido proceso, porque es COLPENSIONES, la que emite la Resolución diciendo que hay pago y creando su propia prueba, por lo que considera que se debe declarar la nulidad de pleno derecho del decreto de la prueba del pago.

ALEGATOS SEGUNDA INSTANCIA

Corrido el traslado en esta instancia para presentar alegatos de conclusión, ninguna de las partes hizo uso de este derecho.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Se circunscribe en establecer si se debe o no declarar la nulidad solicitada por la parte ejecutante de la prueba que fue decretada de oficio por el juez de instancia.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre nulidades procesales conforme al Art. 65 del CPT y de la SS, se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El asunto a resolver es el relativo a determinar si el Juez de primera instancia, incurrió en violación de las normas que regulan la validez de las pruebas, particularmente las relativas a su incorporación de manera oficiosa, en razón a que le dio pleno valor probatorio a las pruebas que allegó COLPENSIONES con posterioridad a la contestación del proceso ejecutivo.

Para el efecto, se debe señalar que, a juicio de esta instancia, la decisión de la a quo debe ser **confirmada** por las razones que se explican a continuación.

El artículo 133 del C.G.P., aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del CPLSS, consagra las causales de nulidad, disponiendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

1. *Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*
2. *Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
3. *Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*
4. *Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*
5. *Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*
6. *Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.*
7. *Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.*
8. *Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*

(...)

PARÁGRAFO. *Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.”*

De igual forma, el artículo 135 de la misma codificación procesal, señala:

“ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. *La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.” (Negrillas agregadas)

En este caso, el recurrente cuando propone ante el juez de instancia la nulidad que aquí se discute, no cita ninguna causal específica de nulidad, no obstante, advierte la Sala que salvo las anteriores causales de nulidad, también puede proponerse como causal de nulidad constitucional, la consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política Nacional;

que es precisamente la norma en que el recurrente funda sus argumentos, señalando que la prueba de pago incorporada de oficio por el juez de instancia, es nula de pleno derecho.

Además de lo anterior, es de resaltar que el artículo 136 de la citada codificación procesal, indica cuáles son las nulidades saneables y dispone:

ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 29 de la CN, señala de manera general que la prueba obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho, disposición que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos, como la SU 371 de 2021 de la Corte Constitucional, en la que se dijo que *“existe una distinción entre la prueba ilegal, entendida como aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), y la prueba inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos fundamentales.”*, de manera que en el presente asunto, se ventilaría la primera de las hipótesis, que consiste en la ilegalidad de la prueba que afecta el debido proceso por no seguir la forma propia del juicio.

Ahora, dice el apoderado de la parte ejecutante, que las pruebas de oficio deben limitarse al proceso ordinario laboral, ya que en los procesos ejecutivos al ser el título claro, expreso y exigible, no le es dable al juez permitir la incorporación de nuevas pruebas, no obstante, a consideración de la Sala, el argumento expuesto por el togado carece de sustento, pues el artículo 54 del CPL y de la SS, dispone que: *“Además de las pruebas pedidas, el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean*

indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”. Obsérvese entonces como la norma en cita no limita la actuación probatoria de oficio a los juicios ordinarios laborales, sino que ,por el contrario, constituye una facultad con que cuentan los jueces como directores del proceso para la materialización de la justicia, es decir, que es un deber del juez hacer uso de dichas facultades en cualquier tipo de proceso que tenga bajo su conocimiento, cuando halle falencias e insuficiencias probatorias que le impidan llegar a la verdad real.

Aunado a lo anterior, si bien puede concluirse que la etapa probatoria en cualquier tipo de proceso laboral y de la seguridad social es reglada y está sujeta a las formas y oportunidades legalmente establecidas, lo cierto es que la incorporación, decreto y práctica de los diferentes medios de convicción y la presencia de inconsistencias en su ritualismo, no siempre conduce a la invalidez, porque lo que se debe garantizar es el equilibrio entre las partes, la garantía de los derechos fundamentales y especial, los derechos de contradicción y defensa, con el fin de obtener una verdadera justicia material; además, de las partes también se exige el deber de colaboración con la administración de justicia, de manera que puedan advertir y discutir oportunamente la validez de las actuaciones procesales, es decir que si la parte que podía alegarla no lo hace oportunamente o actúa sin proponerla, o cuando a pesar del vicio procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, conforme al artículo 136 antes citado, queda saneada la nulidad procesal .

Corolario de lo que viene de decirse, considera esta magistratura que en el presente caso no se aprecia que se haya vulnerado el debido proceso de la parte ejecutante con la incorporación de las pruebas de oficio decretadas por el *a quo*, porque aun cuando el recurrente afirma que es una sorpresa la incorporación de dichas pruebas y que nunca se le dio traslado de las mismas, lo cierto es que desde el 05 de septiembre de 2017, que se dio inicio a la Audiencia Pública que buscaba resolver las excepciones propuestas por COLPENSIONES frente al mandamiento de pago, se decretó de manera oficiosa por el juez, la prueba de constancia de pago efectuada por COLPENSIONES, dándose traslado de la misma al apoderado del ejecutante, quien si bien manifestó su descontento con su decreto, tuvo la oportunidad de contradecirla, aunado a lo anterior, desde ese momento el *a quo*, también decretó de manera oficiosa a COLPENSIONES, la incorporación de prueba complementaria que acreditara el pago, decisión que también fue puesta en conocimiento del apoderado del ejecutante, quien tampoco hizo manifestación alguna y mucho menos solicitó en ese momento al juez de instancia decretar la nulidad de su decisión por considerar que existía vulneración al debido proceso, sino que por el contrario, esperó hasta la Audiencia Pública realizada el 18 de octubre de 2022, para

alegar la nulidad de pleno derecho de las pruebas que fueron incorporadas desde el año 2017.

Así las cosas, no le asiste razón al apoderado de la parte ejecutante cuando manifiesta que existe una transgresión al artículo 29 de la Constitución Nacional, pues a pesar que la prueba de pago allegada por COLPENSIONES no fue solicitada o aportada con el escrito mediante el cual propuso excepciones contra el mandamiento de pago, es decir, que su incorporación al proceso en estricto sentido no se realizó de acuerdo con la oportunidad de solicitud probatoria proveniente de la parte, dichas pruebas encontraron materialización a través del decreto de oficio realizada por el juzgado de primera instancia a través de decisión del 05 de septiembre de 2017, providencia que fue debidamente notificada en estrados y de la cual se dio traslado a la parte ejecutante sin que éste advirtiera en ese momento alguna eventual causal de nulidad, convalidando dicha actuación, de manera que tal medio de convicción surte plenos efectos, toda vez que, no solo fue decretada válidamente por el juez de instancia al hacer uso de la facultad oficiosa con que cuenta, sino que además de haberse presentado alguna irregularidad en su incorporación, la misma quedó saneada por no haber sido alegada en tiempo.

Por lo anterior, se declara improcedente la nulidad propuesta por la parte ejecutante en este proceso ejecutivo laboral y en consecuencia, se ordenara la remisión al Despacho de origen para que continúe con el trámite respectivo.

Finalmente se CONDENARÁ EN COSTAS a la parte ejecutante, al no haber prosperado su recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$580.000.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado del 18 de octubre de 2022, que NO DECLARÓ la nulidad de la prueba formulada por la parte ejecutante **ANDRÉS MAURICIO CALVO** contra **COLPENSIONES**, proferido por el **JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, conforme a las consideraciones de instancia.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte ejecutante **ANDRÉS MAURICIO CALVO** y a favor de **COLPENSIONES**. Las agencias en derecho en esta instancia las estima el ponente en la suma de \$580.000.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión.

Los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **027** del **17 DE FEBRERO DE 2023**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **4a18b869d7239587be7aeb2d61d68f88047593f76d3a32af8911932cda78c639**

Documento generado en 16/02/2023 01:41:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>